SUBSIDIARIEDAD DE LA TUTELA/ Improcedencia parte interesada no cumplió la carga procesal necesaria para el trámite del recurso de queja contra las providencias judiciales atacadas

“(…) el amparo deprecado debe denegarse, pues, el accionante no hizo uso adecuado de los medios ordinarios de defensa brindados por el ordenamiento jurídico para la defensa de sus derechos, pues habiendo interpuesto recurso de queja, no cumplió con el deber que aquel trámite demanda¸ por consiguiente, los hechos inherentes a la presente queja constitucional no pudieron ser evaluados en segunda instancia porque el accionante malgastó las oportunidades que le brinda el ordenamiento jurídico para la defensa de sus derechos.”

Citas: Corte Constitucional, sentencias C-542 de 1992, T-103 y T-213 de 2014; Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia 13797-2015 de 8 de octubre de 2015

**TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA**

**Sala de Decisión Civil Familia**

Magistrado Ponente:

**EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS**

Pereira, doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016)

Acta No. 66 de 12–02-2016

|  |
| --- |
| Expedientes radicados al número |
| **1** | 66001-22-13-000-2016-00033 | **2** | 66001-22-13-000-2016-00039 |
| **3** | 66001-22-13-000-2016-00041 | **4** | 66001-22-13-000-2016-00058 |
| **5** | 66001-22-13-000-2016-00062 | **6** | 66001-22-13-000-2016-00064 |

**I. Asunto**

Se resuelven las acciones de tutela de la referencia, luego de haberse acumulado sus expedientes en proveído del 1 de febrero de 2016, interpuestas por el señor JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA contra el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA,a la que fueron vinculados la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, la Alcaldía de Pereira, la Procuraduría General de la Nación Regional Risaralda y la Personería de Pereira.

**II. Antecedentes**

1. El gestor constitucional, invoca amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y la debida administración de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial encartada.

2. Adujo como fundamento de su reclamo, que presentó en la entidad accionada las siguientes acciones populares:

|  |
| --- |
| Acciones populares radicadas al número |
| **1** | 2015-765 | **3** | 2015-929 | **5** | 2015-930 |
| **2** | 2015-935 | **4** | 2015-970 | **6** | 2015-988 |
| **7** | 2015-1005 | **8** | 2015-1009 | **9** | 2015-1010 |
| **10** | 2015-1016 | **11** | 2015-1017 | **10** | 2015-1019 |

3. Refiere que las anteriores acciones fueron rechazadas por la *a quo* ante lo cual presentó reposición y en subsidio apelación para que se tramitaran en el lugar del domicilio de la entidad accionada que es Pereira, pero el despacho encartado no repuso y no concedió la alzada.

4. Considera que frente al auto que rechaza su acción popular, procede la alzada. Cita varias providencias del Consejo de Estado, requiere la aplicación del artículo 351 del C. P. C. y que le concedan el recurso pedido para tramitar su acción en esta ciudad, que él había escogido a prevención invocando el artículo 16 de la Ley 472 de 1998.

5. Solicita: (i) se tutele su derecho al debido proceso, la igualdad y la debida administración de justicia y se ordene al despacho tutelado conceder la alzada; (ii) al despacho demandado que relacione todas las acciones populares donde no le haya concedido la alzada; (iii) se le escanee copia de su tutela y del fallo al correo electrónico que suministra, se le brinde copia física e íntegra del amparo y (iv) requiere dar trámite de tutela contra la Defensoría del Pueblo de Caldas a fin de determinar si viola la Ley 734 de 2002 al negarse a presentar tutelas a su nombre, incumpliendo su deber función.

6. Por auto del primero de febrero del año que transcurre, se dio trámite a la demanda contra la autoridad judicial accionada, se dispuso la vinculación de la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, la Alcaldía de Pereira, la Procuraduría General de la Nación Regional Risaralda y la Personería de Pereira, se ordenó su notificación, su traslado y la remisión de copias de las piezas procesales que se estimen convenientes para la resolución del presente resguardo constitucional. No se ordenó hacerlo respecto de las demandadas en los procesos en los que considera el actor lesionados sus derechos, porque de acuerdo con las copias de aquellas actuaciones, las demandas fueron rechazadas y por ende, no se encontraban a ellas vinculadas.

6.1. Se arrimó por el juzgado tutelado copia de varias de las piezas procesales de las acciones populares objeto de queja.

6.2. La Procuraduría Provincial de Pereira, indica que en virtud de las acciones populares presentadas por el señor Javier Elías Arias Idárraga, ha designado a diferentes profesionales de la Procuraduría Regional de Risaralda y Provincial de Pereira para dar cumplimiento al artículo 21 de la ley 472 de 1998; informa que las acciones populares no fueron promovidas por esa institución; señala que de presentarse un pacto de cumplimiento, tiene que contar con la intervención del Ministerio Público en defensa de los derechos e intereses colectivos y por último, pide su desvinculación.

6.3. Por su parte la Personería de Pereira, precisó que en este caso particular, desconoce las acciones populares y considera que la Personería ni por acción ni por omisión ha vulnerado derechos al tutelante.

6.4. La alcaldía de Pereira, considera que el Despacho accionado al emitir el auto de rechazo de las acciones populares, está amparado en normas de carácter legal contra las que no procede el recurso de apelación, lo que hace que la decisión tomada sea legal y es la que en derecho corresponde. Solicita que con respecto al municipio de Pereira no se tutelen los derechos solicitados por el accionante porque no ha realizado tales actuaciones o proferido tal decisión judicial y que no es la autoridad que vulnera o amenace vulnerar derechos fundamentales del actor.

6.5. La Defensoría del Pueblo Regional Risaralda guardó silencio.

**III. Consideraciones de la Sala**

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política, Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000.

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares. Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario, porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3. Del mismo modo, cuando la lesión actual o potencial del derecho esencial comprometido provenga de actuaciones o providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional precisa la procedencia del amparo de manera excepcional, es decir, solo cuando se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador; pues desde su inicio, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, *‘salvo en aquellos casos en que se haya incurrido en una vía de hecho, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales.’[[1]](#footnote-1)* Esta posición fue unificada y consolidada en el año 2005, con ocasión de una acción pública de constitucionalidad, en la que se dijo: *“(…) los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela […] la Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. (…)”*.[[2]](#footnote-2) *“No cualquier providencia judicial puede ser objeto de control por parte del juez de acción de tutela, sólo aquellas que supongan una decisión arbitraria o irrazonable, constitucionalmente. De resto, deberá respetarse la decisión del juez natural, permitiendo, por ejemplo, el legítimo espacio de deliberación y disentimiento judicial.”[[3]](#footnote-3)*.

4. Las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales han sido reunidas en dos grupos. Las denominadas ‘generales’ o ‘requisitos de procedibilidad’, mediante las cuales se establece si la providencia judicial acusada puede ser objeto de estudio por el juez de tutela. Y las causales denominadas ‘especiales’, ‘específicas’, o ‘causales de procedibilidad propiamente dichas’, mediante las cuales se establece si una providencia judicial, susceptible de control constitucional, violó o no los derechos fundamentales de una persona.

5. Las causales de procedibilidad generales o requisitos de procedibilidad, han sido presentados por la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos: (a) Que el tema sujeto a discusión sea de evidente relevancia constitucional. (b) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, o de un sujeto de especial protección constitucional que no fue bien representado. (c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez. (d) En el evento de hacer referencia a una irregularidad procesal, debe haber claridad en que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. (f) Que no se trate de sentencias de tutela.

6. Las causales de procedibilidad especiales, específicas o propiamente dichas, como se indicó, se refieren a los defectos concretos en los cuales puede incurrir una providencia judicial y que pueden conllevar la violación de los derechos fundamentales de una persona. De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional, los defectos en los que el funcionario judicial puede incurrir son los siguientes: (i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material y sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; (viii) violación directa de la Constitución.

**IV. Del caso concreto**

1. La inconformidad del demandante en sus escritos de tutela, se centra en la decisión del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira de no conceder la alzada interpuesta contra la decisión de no tramitar las acciones populares por él interpuestas en el lugar de domicilio de la entidad accionada.

2. En ese sentido, se hace un recuento de las actuaciones desarrolladas en dichas demandas constitucionales:

a) El ciudadano Javier Elías Arias Idárraga presentó varias acciones populares que quedaron radicadas en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira contra diferentes entidades financieras, señalando “consigno en la parte final de mi demanda” la dirección de notificación y posible ocurrencia de la violación de derechos “Dirección de notificación (…) Pereira (…) Sitio de vulneración (…) Bogota (sic)- DC”.[[4]](#footnote-4)

b) El despacho judicial rechazó las demandas por falta de competencia y ordenó su envío ante los Jueces Civiles del Circuito de la ciudad de Bogotá.[[5]](#footnote-5)

c. Ante la determinación precitada, el demandante interpuso recursos de reposición y en subsidio el de apelación, para que se aplicara el artículo 16 de la ley 472 de 1998 y se admitieran sus demandas. El juzgado no repuso la decisión impugnada y no concedió el de apelación.[[6]](#footnote-6)

d. Contra la negación de su apelación, el demandante interpuso de nuevo los mismos recursos, ante lo cual el Despacho encartado, con base en el artículo 348 del C. de P. C., los negó por improcedentes.[[7]](#footnote-7)

e. Frente a esta última determinación, el señor Arias Idárraga, presentó queja, recurso que la juzgadora, considerando que no estaba facultada para concederlo e interpretando que se estaba proponiendo una reposición y en subsidio la expedición de copias para el trámite del recurso de queja, resolvió no reponer y para tramitar la queja, le concedió cinco (5) días para que aportara las expensas necesarias para su expedición.[[8]](#footnote-8)

f. El anterior proveído fue nuevamente recurrido en reposición, solicitando además amparo de pobreza, ante lo cual el despacho demandado, tras breves consideraciones, dispuso no reponer y no conceder el amparo por pobre, dejando transcurrir el actor los 5 días concedidos sin sufragar los gastos para compulsar las copias ordenadas, lo que se tradujo en que se declarara prelucido dicho plazo.[[9]](#footnote-9)

3. De inmediato salta a la vista que el amparo deprecado debe denegarse, pues, el accionante no hizo uso adecuado de los medios ordinarios de defensa brindados por el ordenamiento jurídico para la defensa de sus derechos, pues habiendo interpuesto recurso de queja, no cumplió con el deber que aquel trámite demanda¸ por consiguiente, los hechos inherentes a la presente queja constitucional no pudieron ser evaluados en segunda instancia porque el accionante malgastó las oportunidades que le brinda el ordenamiento jurídico para la defensa de sus derechos.

4. Así las cosas, la conducta omisiva observada en el curso del proceso por el hoy accionante se opone a la posibilidad de acudir con éxito al instrumento excepcional de la tutela, que por su naturaleza residual y subsidiaria solo puede ser utilizado cuando no se ha dispuesto de otro medio de protección judicial.

5. No sobre acotar, que la decisión de no avocar el conocimiento de las demandas populares impetradas por el accionante por carecer de competencia, no se advierte que sea el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviación del ordenamiento jurídico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garantías superiores de quien promovió la queja constitucional.

En efecto, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, con apoyo en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998[[10]](#footnote-10), dedujo que “(…) *en este preciso asunto, no existe concurrencia de fueros, pues los hechos presuntamente vulneratorios, los demanda el actor en un lugar específico, y no en todo el territorio patrio, no obstante que así lo afirma, pretendiendo en una incorrecta interpretación de la norma* (…)”

De modo que, contrario a lo aducido por el señor Arias Idárraga, la actuación de la autoridad judicial accionada, propende por respetar el derecho al debido proceso, su importancia es tal que se encuentra contenida en el artículo 29 de la Norma Superior, al disponer que *“nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (…)”[[11]](#footnote-11)*

6. Adicionalmente a lo discurrido, no hay duda que la presente acción constitucional se torna prematura porque aún se desconoce qué posición puedan adoptar los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá a los que le sean asignadas las acciones populares, que podrían incluso ocasionar conflicto de competencia que, en últimas habría de ser decidido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y en ese orden de ideas, solo hasta ese momento se tendría certeza de quien debe asumir el conocimiento del asunto. Igualmente, de efectuar esta Corporación un estudio como el que pide el accionante, estaría invadiendo la órbita de acción del órgano a quien la norma le asigna la facultad para desatar el conflicto.

7. Recuérdese que *“El principio de subsidiariedad de la acción de tutela envuelve tres características importantes que llevan a su improcedencia contra providencias judiciales, a saber: (i) el asunto está en trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. En tal sentido se desarrollará cada uno de ellos”[[12]](#footnote-12).*

8. Puede afirmarse que en este caso, la acción de tutela no procede de manera directa, puesto que no puede ser empleada como mecanismo para decidir lo relacionado con la competencia territorial de la que estima carece el juzgado para conocer de la acción popular instaurada por el peticionario, trámite que aún no se encuentra culminado.

9. En virtud de lo discurrido, (i) se configura la causal de improcedencia prevista en el numeral 1º del artículo 6 del decreto 2591 de 1991 y deviene denegar la protección constitucional deprecada; (ii) se niega lo concerniente con el listado de las demandas populares que el tutelado haya rechazado, asunto que deberá plantear ante ese estrado judicial; (iii) se negará también lo relacionado con la Defensoría del Pueblo de Manizales con fundamento en lo expuesto en el auto admisorio del 1 de 1 de febrero de este año y (iv) se ordenará que por Secretaría, se escanee copia de la tutela y el fallo al correo electrónico suministrado y a su costa se expidan las piezas procesales requeridas.

**V. Decisión**

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE** el amparo constitucional invocado por JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA, contra el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, dentro de las acciones de tutela de la referencia.

**Segundo:** **NEGAR** lo relacionado con el listado de las acciones populares rechazadas por el despacho judicial accionado.

**Tercero: NEGAR** la remisión de copias de la acción, para que se tramite tutela contra la Defensoría del Pueblo de Manizales.

**Cuarto: ORDENAR**, que por Secretaría, se escanee copia de la tutela y el fallo al correo electrónico suministrado y a su costa se expidan las de todo el proceso.

**Quinto:** Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).

**Sexto:** Si no fuere impugnada esta decisión, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese y notifíquese,

Los Magistrados,

**EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS**

**JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO**

**CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS**

 **(En uso de permiso)**

1. Corte Constitucional, sentencia C-542 de 1992. [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte Constitucional, sentencia C-592 de 2005. Criterio reiterado en muchas ocasiones, como en las recientes sentencias T-079 y T-083 de 2014. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Constitucional, sentencia T-213 de 2014. [↑](#footnote-ref-3)
4. Folio 27 Cd Ppal. [↑](#footnote-ref-4)
5. Folio 30 Ib. [↑](#footnote-ref-5)
6. Folio 31-32 Ib. [↑](#footnote-ref-6)
7. Folio 33-34 Ib. [↑](#footnote-ref-7)
8. Folio 35-36 Ib. [↑](#footnote-ref-8)
9. Folios 37-40. [↑](#footnote-ref-9)
10. “*Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.”* [↑](#footnote-ref-10)
11. Sentencia T-685 de 2013, M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez. [↑](#footnote-ref-11)
12. Corte Constitucional Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [↑](#footnote-ref-12)